CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL SOVIETICO

Por el Dr. Percy MAC LEAN ESTENOS, Fiscal de la Corte Superior de Justicia de Junín, Presidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal.

El derecho procesal soviético es poco menos que desconocido en nuestra América, ya que no permitiría fundar una opinión contraria el hecho de que de vez en cuando algún autor haga referencia a una que otra ley o a uno que otro decreto expedido por la Rusia Soviética. Por lo demás, en la órbita del derecho privado, el desconocimiento es casi absoluto. Rusia continúa siendo el país del misterio y de la leyenda. No obstante de que con la caída del Imperio, en una de las revoluciones más sangrientas que registra la historia, se transformó el régimen político y judicial, respecto de este último, las noticias y referencias que nos han llegado son muy pobres y escasas. El libro de Labry¹ constituye una de las pocas fuentes a la que el estudioso puede acudir, por vía de sumaria información, respecto a la existencia de determinadas normas de carácter procesal que puedan contribuir al estudio del derecho procesal soviético. Esta obra es, sin duda alguna, de inapreciable utilidad para aquellos que deseen penetrar en el misterio de la organización judicial rusa de la hora actual, cuyos principios fundamentales se manifiestan a fines de 1924. En relación con la legislación penal y procesal la Ley Fundamental de la Unión de las Repúblicas Socialistas del Soviet estableció en su artículo 1º: "A la U.R.S.S., personificada en sus organismos supremos corresponde: Fijar las bases de la legislación criminal y procesal de la Unión." La norma penal se justifica

1 LABRY. *Una legislación comunista*. París, 1920.

ses de América, sin excepción, aquel principio que recibió su consagración definitiva en las conquistas de la Revolución Francesa: "Nullum crimen et nulla poena sine previa lege penale". En el sistema ruso la amplitud del juez casi no tiene límites. Pero una amplitud destinada no a considerar la equidad, como ocurre en el sistema angloamericano, sino para apreciar, según su leal saber y entender, al margen de lo prescrito en la ley, lo que él considera que debe ser tenido como delito, aunque no se encuentre previamente establecido en la ley penal. Tal sistema, extraño a nuestro medio y a nuestra tradición, no puede compararse jamás con nuestros sistemas legales formados por la tradición jurídica de derecho francés y del derecho español, a su vez, derivados del derecho romano.

Los antecedentes de la legislación procesal rusa se encuentran contenidos en la colección de Labry. Por esta colección, en la que las leyes están agrupadas por materias, los juristas de América pueden enterarse que todos los tribunales penales, civiles y mercantiles del régimen de los Zares, quedaron abolidos en 1917² y sustituidos por "tribunales revolucionarios" o "populares" nombrados por elección y compuestos en gran parte por trabajadores manuales. Esta colección contiene numerosos decretos relacionados con la organización y funcionamiento de los tribunales penales y con las reglas procesales empleadas por los mismos. Entre esos decretos cabe mencionar los de 29 de marzo de 1918 y 23 de noviembre del mismo año.³

No existe ninguna referencia respecto a la organización de los tribunales civiles. Sin embargo, su existencia se encuentra comprobada por una serie de disposiciones que, al regular varias ramas del derecho sustantivo, atribuyen funciones de jurisdicción contenciosa y voluntaria a los "tribunales populares locales" que son, sin lugar a dudas, los órganos judiciales civiles de primera instancia, sobre los cuales funcionan los "tribunales populares provinciales". En el vértice de esta jerarquía de tribunales populares está una Sección de Casación, que reside cerca del Comité Central Ejecutivo de los Consejos. (Decreto de 11 de junio de 1918).⁴

En la organización judicial soviética es interesante el Decreto sobre supresión de las herencias, de 27 de abril de 1918 y las instrucciones para su aplicación (arts. 1, 3, 23-27) y el reglamento sobre las secciones notariales de 16 de septiembre de 1918 (arts. 64, 70, 75).⁵

2 LABRY. *Op. cit.* Pág. 500.

3 LABRY. *Op. cit.* Págs. 500-510.

4 LABRY. *Op. cit.* Pág. 501.

5 LABRY. *Op. cit.* Págs. 45-52 y 511-529.

se instituyó un "colegio de defensores" a cuyos miembros corresponde de modo exclusivo el patrocinio en materia penal y la representación de las partes en materia civil en aquéllos casos taxativamente determinados en que el litigante no puede comparecer en persona, es decir, cuando están en causa entidades públicas, cuando tienen que litigar menores de 18 años o incapacitados mentales; cuando las partes no pueden comparecer por imposibilidad material (art. 1). Para poder obtener el patrocinio de un abogado en estos casos, debe presentar su solicitud al tribunal popular quien la trasmite al colegio de los defensores (art. 2). El colegio de los defensores elige entre sus miembros un consejo, que tiene poderes disciplinarios y reglamentarios sobre todo el colegio, pero obra siempre bajo el control del Comisario local gubernativo de justicia (art. 4). Los defensores pueden ser llamados por el tribunal popular para hacer las veces de acusadores públicos (art. 2). Además deben prestar su ayuda jurídica a la población mediante sus dictámenes, que los Colegios estarán siempre dispuestos a emitir conforme a las instrucciones dadas por el Comisario de Justicia y por el *Soviet* (art. 4).

Al Comisario de Justicia corresponde designar la sede de cada defensor, distribuyéndolos entre los diversos órganos judiciales (art. 5). No se expresa, de manera concreta, si tales defensores son remunerados por el Estado, pero ello se deduce implícitamente del artículo 7, según el cual las partes, en compensación de la colaboración de los defensores, deben pagar solamente un impuesto especial al erario público, conforme a una tarifa fijada por el Comisario local de Justicia.

Considero que este sistema adoptado por la Rusia soviética para destruir a la libre intervención del abogado, redundará en perjuicio de la celeridad y la economía del proceso civil. En el campo del proceso no puede ser más benéfico para el Estado la conservación del principio dispositivo. La abogacía libre es la natural encarnación de este principio. En concepto de Calamandrei, la sentencia justa puede considerarse como la resultante de tres fuerzas que obran en tres direcciones diversas y con desigual intensidad, es decir, de tres inteligencias que examinan un mismo problema desde tres diferentes puntos de vista y con diverso interés: frente a la labor del juez, que en su posición central mira la litis en su integridad y con un espíritu que, por desinteresado, es imparcial y ecuánime, pero también, a menudo, superficial y negligente, eficazmente se agrega la obra de los dos abogados contendientes, cada uno de los cuales, si puede carecer de serenidad objetiva por la unilateralidad del interés que lo mueve y por su tendencia a poner de manifiesto sólo los aspectos de la cuestión que favorecen a su cliente, puede, sin embargo, precisamente por la pasión con

afectan los intereses de las otras repúblicas; emitir conclusiones a las preguntas sobre la legalidad desde el punto de vista de la Constitución, de tales o cuales disposiciones de las repúblicas federadas; la solución de litigios judiciales entre las repúblicas federadas; el examen de las acusaciones contra los altos funcionarios de la Unión por delitos profesionales.

El Tribunal Supremo de la Unión funciona de la siguiente manera: en sesión plenaria del Tribunal Supremo de la Unión de las R.S.S.; en colegios del Tribunal Supremo de la Unión de las R.S.S. juzgando en lo civil y en lo criminal; en el colegio militar y en colegio de transportes militares. El Tribunal Supremo está formado por once miembros, en sesión plenaria, incluyendo el presidente; por cuatro Presidentes de las sesiones plenarias de los tribunales supremos de las repúblicas federadas y de un representante de la Dirección Política Unificada de Estado de la Unión de las R.S.S. El Presidente, su suplente y los otros cinco miembros son nombrados por la Junta Directiva del Comité Ejecutivo Central de la Unión de las R.S.S.

El Procurador del Tribunal Supremo de la Unión de las R.S.S. y su substituto son nombrados por el Comité Ejecutivo Central de las R.S.S. y está encargado de dar conclusiones sobre todas las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal, sostener la acusación en sesión del mismo, y en caso de desacuerdo con la decisión dada en sesión plenaria del Tribunal Supremo de la Unión, de apelar ante la Junta Directiva del Comité Ejecutivo Central de la Unión de las R.S.S.

Las sesiones plenarias del Tribunal Supremo de la Unión forman Cámaras judiciales para examen de gestiones criminales y civiles de importancia excepcional, cuyo contenido interese a dos o más repúblicas federadas; y de gestiones donde estén implicados personalmente miembros del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de los Comisarios del Pueblo de la Unión de las R.S.S. Sólo puede declararse competente para esos asuntos en virtud de decisiones particulares expedidas cada vez por el Comité Ejecutivo Central de la Unión o su Junta directiva (arts. 43, 45 y 47).

El artículo 102 de la Constitución Soviética de 1936 organizó el Poder Judicial en la siguiente forma: "Los jueces son independientes y su única norma es la Ley." Este precepto tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en la realización de la función jurisdiccional. Además, se instituyen asesores del pueblo en todos los tribunales (art. 103) con lo que se otorgan determinadas garantías en la persecución de la certidumbre jurídica. Se estableció el derecho de defensa y la publicidad de las audiencias (art. 111). Estas dos últimas garantías son relativas,